

Bogotá D.C., 2025-05-26 18:37



Al responder cite este Nro.
202550000606411

Señor

CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO

Director General

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM

Cel: 3138863439.

Email: dbermeo@cam.gov.co

Cra. 1 No. 60-79 Barrio Las Mercedes

Neiva – Huila

Asunto: Respuesta a los derechos de petición con radicados ANT No. 202462002171872, 202562000490772, 202562000776162 y 202562000920662. Solicitud de información de procesos de titulación en áreas de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM.

Respetado doctor Agudelo, reciba un cordial saludo,

Desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras damos respuesta a los derechos del asunto, mediante los cuales de manera reiterada ha solicitado información sobre los procesos de adquisición y dotación de tierras a comunidades campesinas y étnicas en el departamento del Huila, dentro de las áreas ambientales protegidas, bajo la competencia de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM que usted dirige.

Al respecto, sea lo primer manifestar que, para la Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de tierras rurales de la Nación que ejecuta la política de ordenamiento social de la propiedad rural, es de diametral importancia velar por el cumplimiento de las normas ambientales en sus procedimientos administrativos, como en la dotación de tierras a comunidades étnicas, que están a cargo de la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos de la Entidad. Por lo anterior, se emite la presente comunicación, teniendo en cuenta que, desde la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión de la ANT, se dio traslado de las peticiones del asunto, informado que desde esa Dependencia no se han realizado procesos de titulación a población campesina, en áreas delimitadas como ambientales protegidas dentro del departamento de Huila.

En consecuencia, mediante la presente se remitirá la información solicitada por la Entidad a su cargo, dando cuenta que efectivamente desde la Dirección de Asuntos Étnicos se ha realizado la adquisición de predios para **comunidades indígenas** en el departamento de Huila, teniendo que algunos de estos predios se encuentran en las áreas protegidas como el *Parque Natural Regional (PNR) Cerro Páramo Miraflores* y del Distrito de Manejo Integrado Serranía de Minas, pero también se dará cuenta de cómo desde la Dirección de Asuntos Étnicos se ha velado por el debido proceso administrativo, en observancia de la Ley 160 de 1994, el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, las competencias misionales de la ANT, establecidas en el Decreto 2363 de 2015, e inclusive, que **en el marco de dichos procedimientos, se solicitaron conceptos ambientales a la CAM, con lo cual se puede dar cuenta de que las gestiones adelantadas por parte de la ANT han sido transparentes**, puestas en conocimiento de la Entidad a su cargo, y de ninguna manera, en desconocimiento o a espaldas de las normas ambientales correspondientes.

En efecto, resulta necesario puntualizar que mediante la comunicación con radicado ANT No. **202462002171872** del 12 de marzo de 2024, la Entidad a su cargo manifestó lo siguiente:

En el marco de la administración de estas áreas protegidas regionales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, hemos sido conocedores de procesos de adjudicación de predios que pudiesen estar siendo entregados a comunidades campesinas e indígenas, así como de formalización de la propiedad, por tal razón y, teniendo en cuenta que los procesos que se adelanten desde la oficina que Usted lidera tendrán influencia directa en aquellos que se suscitan al interior y en zonas circundantes de las áreas protegidas regionales, respetuosamente solicitamos que se nos brinde información sobre las adjudicaciones de predios y los de formalización de propiedad (shapes y actos administrativos de entrega), que se hayan realizado o que estén en proceso, así como que se nos tenga en cuenta en la toma de decisiones al respecto, antes, durante y después de surtido el trámite respectivo.

Así mismo, mediante la comunicación con radicado **202562000776162** del 21 de marzo de 2025, desde la CAM se puntualizó que el predio adquirido por la ANT al cual se hacía referencia y se ubica en el *Parque Natural Regional (PNR) Cerro Páramo Miraflores*, era el predio “El Paraíso (FMI 202-525)” ubicado en la Vereda La Pradera del Municipio de Gigante a la comunidad del Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá – Pueblo Nasa, donde posteriormente se manifestó lo siguiente:

Por lo anterior, solicitamos una inmediata intervención de la ANT para que se resuelva la problemática generada por el loteo y asignación de predios para el desarrollo de actividades productivas al interior del PNR Cerro Páramo de Miraflores, específicamente en “zona de preservación”, en donde todo tipo de intervención que afecte los objetivos de la declaratoria de dicha área como protegida están PROHIBIDOS.

Por su parte, en la petición con radicado ANT 202562000490772 del 04 de marzo de 2025 se dijo que:

Conocimos por información proveniente de habitantes de zonas aledañas al PNR Cerro Páramo de Miraflores, sobre la presencia de una comunidad Indígena del Cauca, en zona del Parque, lo cual fue corroborado por el CRIC, de igual forma de una comunidad en el DRMI Serranía de Minas.

De acuerdo con lo anterior, y según lo manifestado en sus reiteradas peticiones, pareciera que desde la ANT no se le ha informado nada sobre los procesos de adquisición de predios afectados con medidas de protección ambiental, para comunidades indígenas en el departamento del Huila, y que desde la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM se habrían enterado de dichas gestiones por cuenta de vecinos, y de averiguaciones propias de la CAM, dando a entender que la ANT habría omitido informarle lo respectivo.

Sin embargo, esto resulta contrario a la realidad como se expondrá a continuación, puesto que **para adelantar los procedimientos de compra de los predios** que efectivamente traslapan con las áreas protegidas del *Parque Natural Regional (PNR) Cerro Páramo Miraflores* y del Distrito de Manejo Integrado Serranía de Minas, **desde la Dirección de Asuntos Étnicos se remitieron las respectivas comunicaciones a la CAM, informando de los procesos que se venían adelantando, de la finalidad de los mismos (dotación de tierras para comunidades indígenas)**, y se solicitaron conceptos ambientales sobre los usos permitidos y rondas hídricas.

Sobre el mencionado predio *El Paraíso*, identificado con el FMI 202-525, ubicado en la Vereda La Pradera del municipio de Gigante, el cual fue adquirido por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos en favor de la comunidad del Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá – Pueblo Nasa, se reitera que la CAM no conoció de esta adquisición por parte de vecinos de la zona o averiguaciones de la Corporación, **sino por información remitida de primera mano por parte de la ANT**. Lo anterior se afirma, puesto que, al consultar el respectivo expediente de adquisición del predio, se pudo evidenciar que la primera comunicación de la ANT a la CAM se remitió mediante **el radicado 20187600555161 del 18 de julio de 2018** en la que expresamente se solicitó *establecer cuál es la tipología del predio y determinar si los límites de las reservas forestales y áreas protegidas traslapan el mencionado predio*. Así mismo, mediante la comunicación **20225000356151 del 04 de abril de 2022**, reiterada mediante el radicado **20225000729251 del 13 de julio de 2022**, se solicitó *la expedición del Concepto Técnico Ambiental, que incluya el Acotamiento de las Rondas Hídricas*, sobre el predio El Paraíso.

Inclusive, es menester indicar que, en respuesta a las solicitudes de la ANT antes mencionadas, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM remitió el respectivo concepto ambiental, el cual fue un insumo fundamental en la elaboración del respectivo informe agroambiental de la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT en el referido proceso de adquisición del predio *El Paraíso*, identificado con el FMI 202-525. En efecto, mediante la comunicación con radicado CAM No. **20231020003671 del 05 de enero de 2023** se remitió a esta Dirección el mencionado concepto ambiental, en el cual se informó la zonificación y usos permitidos en el predio, incluso en la zona que comprende el área protegida del PNR Cerro Páramo Miraflores, en el que se da cuenta que la posibilidad de realizar actividades agropecuarias y silvopastoriles, en tanto se

correspondan con la respectiva zonificación. Así mismo, se informó que:

Se establece que el polígono se ubica en la vereda La Pradera del municipio Gigante, se informa que no se encuentra dentro de las figuras de protección SINAP como es Parque Natural Nacional, tampoco se ubica en Distrito Regional de Manejo Integrado, ni en ecosistemas estratégicos de Páramos y Humedales priorizados e identificados por la Corporación en el departamento del Huila.

Así mismo, se informa que 45 hectáreas del polígono se ubican en áreas del Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores (Ver anexo figura 1) adoptado por La Corporación a través del Acto Administrativo 009 del 17 de mayo de 2019, Mediante en mención se adoptó la zonificación y sus usos, por medio del cual en sus artículos Cuarto y Quinto se definen la zonificación y regímenes de uso. Al contrastar las coordenadas se establece que se ubica en una clase de zonificación.

Por su parte, en cuanto al resultado del estudio agroambiental realizado desde la ANT, es oportuno aclarar que, según la misma información remitida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, **no todo el predio se superpone con el Parque Natural Municipal de Gigante y Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores**, como se puede observar en las salidas gráficas adjuntas en el respectivo Concepto de la CAM que se anexó en el Informe Agroambiental.

Ahora bien, de los hallazgos que se presentaron en la visita técnica y en la elaboración del Informe Técnico Agroambiental de la Dirección de Asuntos Étnicos, se puede dar cuenta de **la situación del predio, al momento de adelantarse el procedimiento de compra**, con lo cual se hace evidente que **el predio no se encontraba en un estado de preservación idóneo, como debería corresponder con un área protegida** de tanta importancia para la región, como se manifiesta en sus reiteradas peticiones. Sobre el particular, se destaca lo siguiente:

*De acuerdo con la inspección ocular agroambiental, se indica que **en el predio ofertado se identificaron alrededor de dieciocho (18) potreros con coberturas de pastos limpios** y enmalezados, rastrojos bajos, bosques primario y ripario; igualmente, se pudo evidenciar que las zonas enmalezadas o con rastrojos las están limpiando con guadaña. Por otro lado, existen sectores con presencia de piedras que no impiden el desarrollo de actividades agropecuarias; **también, se observó que el pisoteo del ganado bovino durante el pastoreo, está generando diferentes daños en el suelo como cambios estructurales y escases de nutrientes**.* (negrilla y subrayado fuera de texto)

Inclusive, del registro fotográfico realizado en la visita técnica del componente agroambiental, se puede dar cuenta de las **actividades de ganadería, infraestructura para el corte de pasto, el loteo o potrerización en el que se le daba manejo a las actividades de ganadería, y el cultivo de pasto de corte elefante** para alimentar el ganado, de manera que se puede afirmar que **el antiguo propietario no tenía el predio en un estado de preservación ambiental óptimo**, con evidentes afectaciones antrópicas y que las actividades económicas realizadas no se corresponden con las que se deberían realizar en un predio afectado por una medida de protección ambiental. Así, del registro fotográfico mencionado, se anexa a la presente comunicación el correspondiente Informe Agroambiental, pero se destacan las siguientes imágenes:

		
Cuarto procesador de leche	Cochera para cerdos	Gallinero
		
Pastos limpios	Casa	Líneas de energía
		
Tanque de almacenamiento de agua No. 2	Establo y corral	Alberca ubicada en el establo
		
Alberca potrero La Mochila	Alberca potrero La Palma	Tanque de almacenamiento de agua No. 1
		
Picadora de pastos	Ganadería	Cerca interna



Mantenimiento de potreros con
guadaña



Alberca para bebedero del
ganado



Pasto de corte

De conformidad con lo anterior, llama la atención de esta Entidad que el predio, siendo explotado por el propietario anterior, contaba con gran variedad de afectaciones antrópicas, generadas por actividades económicas que no eran permitidas, **realizando actividades de ganadería, loteo, cultivo de pastos para forraje, y que en todo caso, el predio adquirido no se encontraba en un estado de preservación ambiental óptima**, lo cual no generó ningún tipo de intervención por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, hasta donde se conoce por parte de la ANT, pero que tras entregarse el predio para el acceso a tierras de la comunidad indígena del Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá – Pueblo Nasa, se generan estas peticiones, donde en algunas de ellas se señala que la comunidad indígena habría generado daños ambientales, en un predio del cual ya se tiene registro y evidencias de que no estaba en un estado de preservación ambiental medianamente adecuado.

Por lo anterior, se advierte que si a la comunidad indígena ahora ocupante del predio se le está señalando de generar daños ambientales, sobre un predio que ya tenía afectaciones ambientales evidentes, y que la gestión tendiente a la protección ambiental de la CAM se generó de manera sobreviniente a la compra del predio para la comunidad indígena, pero que esta misma acuciosidad no se desplegó de manera previa al asentamiento de la comunidad indígena, esto podría entenderse como una actitud discriminatoria por parte de la Corporación **frente a una comunidad indígena, víctima del conflicto armado, vulnerable y desplazada, a quien el Estado colombiano le debe garantizar una atención bajo un enfoque diferencial**, en concordancia con la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y demás normas que regulan la materia.

En efecto, sin el ánimo de confrontar la postura de la Corporación de velar por la preservación de las áreas protegidas, **se le hace un llamado para que en el marco de sus competencias realice un trabajo articulado con el Resguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá**, y vea en el proceso de acceso a tierras para esta comunidad, la oportunidad de tener a **un actor en el territorio, aliado y comprometido con la preservación y restauración ambiental del predio, que previamente estaba siendo explotado bajo prácticas ganaderas que generaban afectaciones ambientales ostensibles**.

Justamente en ese punto se expone que la Agencia Nacional de Tierras no puede realizar adjudicaciones en predios afectados bajo figuras de protección ambiental a comunidades campesinas, **pero sí puede adjudicar o formalizar este tipo de predios a comunidades indígenas**, puesto que así se permitió en el procedimiento de acceso a tierras para comunidades indígenas, según lo establecido en la Ley 160 de 1994, el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, e inclusive bajo lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior, además se da en reconocimiento de las buenas prácticas y lucha histórica por la protección ambiental que han realizado las comunidades indígenas en el territorio colombiano.

Ampliando lo anteriormente expuesto, resulta pertinente poner de presente que en el régimen jurídico colombiano, si bien los parques naturales son generalmente inalienables según el artículo 63 de la Constitución Política, **existe un régimen especial que permite la compra o adjudicación de tierras dentro de parques naturales para comunidades indígenas**, en desarrollo de sus derechos colectivos y ancestrales. Es así que la Corte Constitucional ha reconocido este régimen especial en amplia jurisprudencia, como la Sentencia C-361 de 2024, donde se establece que el **Sistema de Parques Nacionales Naturales cuenta con un régimen de excepción para las comunidades indígenas**, permitiendo la adjudicación colectiva de tierras y el aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales, siempre que se respeten las tecnologías compatibles con la protección ambiental y se garantice la permanencia de estas comunidades en sus territorios.

Es así como de la referida Sentencia C-361 de 2024, se define la exequibilidad del literal g) del artículo 6 de la Ley 70 de 1993, donde se señala que si bien se mantiene la prohibición de realizar titulaciones o enajenaciones para comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras – NARP en áreas protegidas ambientalmente, esta misma prohibición no aplica para comunidades indígenas que gozan de un régimen especial, en reconocimiento de la armonización de sus prácticas tradicionales con el cuidado del medio ambiente, y de lo cual se resaltan los siguientes apartes:

Por su parte, la Carta de 1991 reconoce que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, en la cual los grupos étnicos y sus miembros son titulares de una especial protección constitucional. En esa medida, la Ley 70 de 1993 le impuso un reto a Parques Nacionales Naturales, en atención a su misión de conservación ambiental y a su deber de garantizarles el derecho a la igualdad a estos colectivos. Esta tensión aparente ha sido abordada mediante el diálogo permanente entre el Estado y las comunidades.

En esta línea, precisaron que el Sistema de Parques Nacionales cuenta con un régimen de excepción, que aplica a las comunidades indígenas y a las comunidades negras, sin que necesariamente medie un título de propiedad colectiva. Ello responde a la protección que la Constitución les otorga a los usos tradicionales y al aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los grupos étnicos, “derivado del ejercicio de sus derechos territoriales, culturales y a la autonomía y autodeterminación”

De tal suerte, el artículo 2.2.2.1.9.2. del Decreto 1076 de 2015 dispone la compatibilidad entre la constitución de una reserva indígena y la declaratoria de un parque nacional

natural. En este escenario, debe establecerse un régimen especial en beneficio de la comunidad, con el fin de respetar su permanencia en la zona y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos renovables, con observancia de las tecnologías compatibles con la protección del área respectiva.

Además, en el caso de los grupos étnicos, el artículo 2.2.2.1.8.1. adquiere un carácter dispositivo. Lo anterior, dado que las categorías de zonificación deben interpretarse de manera armónica con los usos y costumbres de estas comunidades, con el fin de materializar los principios de pluralismo y diversidad cultural. Ello, a diferencia de normas imperativas como aquellas que declaran un área como parte del Sistema o consagran sus finalidades o sus atributos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

Agregaron que, en atención a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, entre esos el derecho a la propiedad colectiva y al aprovechamiento de los recursos naturales, surgió un nuevo paradigma de conservación. Ello se refleja en la construcción de decisiones institucionales como la Política de Participación Social en la Conservación (2002), “Parques con la gente”, que reconoce la función social de la preservación y formas ancestrales e históricas de interactuar con el territorio.

Este tipo de decisiones le han permitido a Parques Nacionales Naturales garantizar la conservación de áreas de especial interés ecológico para la Nación, y contribuir a la preservación étnica y cultural de los pueblos y comunidades que habitan o usan los territorios protegidos. Lo anterior se ha logrado mediante la suscripción de acuerdos o convenios con organizaciones de pueblos indígenas, movimientos afrocolombianos y consejos comunitarios.

(...)

*Por otro lado, indicaron que, actualmente, existen 64 áreas protegidas. De estas, 43 corresponden a la categoría de parque nacional natural, y **19 se encuentran superpuestas con resguardos indígenas**. Estas zonas de concurrencia se ubican en varias regiones del país, como la Amazonía, el Caribe, el Pacífico, la Orinoquía y la Andina. En estos territorios operan mecanismos de coordinación para la gobernanza entre las autoridades tradicionales y la autoridad ambiental. Como ya se dijo, estos propenden por el trabajo conjunto, el diálogo entre las partes, la resolución de conflictos y la toma conjunta de decisiones.*

A su vez, en las consideraciones de la Sentencia C-361 de 2024, y ahondando en la fundamentación del régimen jurídico especial para la titulación de comunidades indígenas en áreas protegidas ambientalmente, se deja sentado que la Corte Constitucional ya ha analizado previamente la pertinencia y concordancia de esta excepcionalidad bajo la Constitución Política, a la luz de la Ley 160 de 1994, el Decreto 1071 de 2015, y el Decreto 1076 de 2015, trayéndose a colación el análisis realizado previamente en la Sentencia T-378^a de 2014. Por lo anterior, de esta última sentencia se exponen las siguientes consideraciones:

Entiende la Sala que siendo precisamente la figura de Área de Reserva Forestal una de las limitaciones a la propiedad y, siendo el resguardo indígena una forma de propiedad colectiva que por mandato constitucional resulta inalienable, imprescriptible e inembargable, se hace posible compaginar las dos estipulaciones. Para la Sala, el mandato contenido en el artículo 87 de la Ley 160 de 1994, al atribuir las funciones ecológica y social, signa, en mucho, el destino del territorio del resguardo como propiedad:

Artículo 87°. Las tierras constituidas con el carácter legal de resguardo indígena quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de sus integrantes.

En similar sentido se tiene lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto 2164 de 1995 , a lo cual se suma el procedimiento fijado en el artículo 19 de la misma normativa .

Respecto de la función ecológica ha expuesto la Corte en sede de constitucionalidad:

“(…) Por lo que respecta a la función ecológica de la propiedad, puede afirmarse que su consagración constitucional constituye una novedosa respuesta del Constituyente a la problemática planteada por la explotación y uso indiscriminado de los bienes y derechos particulares en contra de la preservación del medio ambiente sano, considerado como un derecho y un bien de la colectividad en cuya protección debe estar comprometida la sociedad entera.

“(…) con la introducción de la nueva función ecológica se ha incorporado una concepción del ambiente como límite a su ejercicio, propiciando de esta manera una suerte de “ecologización” de la propiedad privada, “porque así como es dable la utilización de la propiedad en beneficio propio, no es razón o fundamento para que el dueño cause perjuicios a la comunidad como por ejemplo con la tala indiscriminada de bosques, la contaminación ambiental, que van en detrimento de otros derechos de los asociados como lo son el de gozar de un medio ambiente sano, que en últimas, se traducen en la protección a su propia vida”. (negritas fuera de texto)

Entiende pues la Sala de Revisión que es precisamente esa función ecológica, estipulada legalmente y, con arraigo constitucional, la que permite armonizar las eventuales tensiones entre la forma de propiedad del Resguardo y las exigencias medioambientales derivadas de la declaración de un Parque Nacional Natural. En tanto las comunidades indígenas ajusten las actividades en sus territorios a esa función ecológica y, preserven su rol histórico de conservación del medio ambiente en los espacios naturales que habitan, resultará posible hacer compatible entre el Resguardo como propiedad y el Parque Natural como figura tutelar del medio ambiente.

Sentado lo anterior y, reiterando la importancia del territorio para la conservación de la identidad cultural, fuerza concluir que dada la viabilidad de preservar el territorio de las comunidades en Parques Naturales, no hay razón para afectar la identidad de los pueblos nativos cuando se da esta última figura. La existencia del Parque Natural como mecanismo de conservación, permite que los lugares sagrados y, el entorno en el que se desarrollan las actividades encaminadas al sustento de la colectividad siga existiendo, con lo cual, tanto la dimensión espiritual, como la física; se siguen realizando. En esa medida, concluye la Sala Cuarta de Revisión que no resulta cierta la idea, según la cual, la declaración de Parque Nacional Natural habrá de conducir ineluctablemente a la destrucción de la identidad cultural y las tradiciones de las colectividades que han habitado ancestralmente los terrenos en objeto de la declaración. Para la Sala, carece pues de sustento, el reclamo formulado por el accionante y quienes lo acompañan respecto de este reparo, no teniendo lugar el amparo.

El Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonía y es un Resguardo Indígena. Como ya se explicó, la Reserva Forestal continúa vigente y solamente perdería su protección legal especial en caso de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo el cumplimiento de requisitos legales, efectúe la sustracción de la reserva forestal, sin que ello pueda hacerse a expensas de la propiedad colectiva de las comunidades y los derechos de las mismas. Por su parte, el derecho de

propiedad colectiva queda sujeto a las restricciones que implican las funciones ecológica y social de la propiedad, así como la limitación en el uso que se impone a través del acto administrativo de constitución del Parque Nacional Natural.

Por lo que atañe a la afectación de la competencia de las autoridades del colectivo, esto es, el quebrantamiento de la autonomía de la comunidad indígena, es claro que en lo atinente al régimen de propiedad, los resguardos preservan su autonomía en tanto cumplan con las funciones ecológica y social mandadas en el ordenamiento jurídico, tal como se ha explicado en esta sentencia. La Sala estima que en este punto la autoridad indígena deberá coordinar su accionar con las Corporaciones Autónomas Regionales (según cada jurisdicción) en cuanto al manejo y administración de la respectiva área protegida.

Ahora bien, por la pertinencia al caso sometido a revisión, resulta importante recordar lo que estableciera el artículo 7 del Decreto 622 del 16 de marzo de 1977 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte XIII, Libro II, del Decreto Ley No.2811 de 1974 sobre Sistemas de Parques Nacionales, la ley 23 de 1973 y la ley 2a. de 1959” que reza textualmente:

“Artículo 7: No es incompatible la declaración de un Parque Nacional Natural con la constitución de una reserva indígena; en consecuencia cuando por razones de orden ecológico y biogeográfico haya de incluirse total o parcialmente un área ocupada por grupos indígenas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los estudios correspondientes se adelantarán conjuntamente con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA y el Instituto Colombiano de Antropología, con el fin de establecer un régimen especial en beneficio de la población indígena, de acuerdo con el cual se respetará la permanencia de la comunidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables, observando las tecnologías compatibles con los objetivos del Sistema señalado al área respectiva. (...)” (Negrilla fuera de texto)

Ahora bien, de la exposición jurisprudencial antes enunciada, de la cual sobra mencionar más ejemplos de la reiterada línea jurisprudencial que reconoce la legalidad de realizar procedimientos de compra y titulación de predios en parques naturales para comunidad indígenas, vale la pena mencionar que el Decreto 1076 de 2015 también regula esta compatibilidad entre la constitución de reservas indígenas y la declaratoria de parques nacionales naturales, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.2.2.1.9.2. Régimen especial. No es incompatible la declaración de un parque nacional natural con la constitución de una reserva indígena; en consecuencia cuando por razones de orden ecológico y biogeográfico haya de incluirse, total o parcialmente un área ocupada por grupos indígenas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los estudios correspondientes se adelantarán conjuntamente con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER-, con el fin de establecer un régimen especial en beneficio de la población indígena de acuerdo con el cual se respetará la permanencia de la comunidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables, observando las tecnologías compatibles con los objetivos del sistema señalado al área respectiva.

Con todo, ya resulta redundante manifestar las consideraciones normativas expuestas en el Decreto 1071 de 2015, sobre la procedibilidad de realizar titulaciones a comunidades indígenas en áreas de parques naturales, por lo cual se recalca que en todo caso, desde

el legislador colombiano se reconoce un enfoque diferencial, que exalta el compromiso de las comunidades étnicas y su armonización de actividades de vida con el cuidado de medio ambiente, razón por la cual a su vez se determina que las prácticas de comunidades indígenas siempre debe estar alineada con los usos permitidos en la áreas protegidas, y con la función social y ecológica de la propiedad, de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano.

Esto a su vez resulta concordante con las conclusiones del informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que concluye bajo evidencia científica, que los pueblos indígenas y tribales son los mejores guardianes de los bosques de América Latina y el Caribe, gracias a su conocimiento tradicional, su relación cultural con la naturaleza y la gestión colectiva de sus territorios.¹

Ahora bien, retomando las conclusiones del Informe Agroambiental y del Informe de Necesidad de la Tierra realizados por la Dirección de Asuntos Étnicos, se tiene que en el trabajo técnico del proceso de compras, se pudo analizar que pese a las limitantes y condicionantes ambientales que se tienen sobre el predio *El Paraíso*, por lo menos en lo que se traslapa con el Parque Natural Regional (PNR) Cerro Páramo Miraflores, se tiene que la comunidad del Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá conoce sus limitantes ambientales, y está comprometida con la restauración de los bosques y establecer usos que se correspondan con las actividades que son permitidas bajo la norma ambiental, de lo cual se destaca lo siguiente del Informe Agroambiental:

*g) Viabilidad explotación SI_X_NO__ (Indique cuál): El predio de nombre Paraíso tiene vocación para desarrollar cultivos de ciclo largo, plantaciones forestales protectoras y de árboles frutales, con el fin de incrementar la productividad del suelo, salvaguardar la zona, contribuir a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental.
(...)*

Teniendo en cuenta la vocación del predio, se puede utilizar para realizar plantaciones con árboles de diferentes especies tales como “monday”, cobre, cedro, guamo, laurel y aguacatillo, con el propósito de recuperar tierras degradadas por otras actividades; a su vez, la siembra de plantas nativas protectoras de las fuentes hídricas, con el objetivo de incrementar el caudal en los nacimientos de agua.

En la misma línea, desarrollar cultivos de protección que agreguen materia orgánica en el suelo, lo que mejora su estructura y promueve un suelo sano y fértil; asimismo, usar abono verde, con la finalidad de proteger y recuperar el suelo, ya que son plantas que tienen la capacidad de adaptarse a diversos suelos y climas; además, son de rápido crecimiento y alto poder de producción de material vegetativo.

*Por otra parte, las áreas de interés ambiental se deben dedicar a la preservación y restauración ecológica, ya que cuando no se respetan, los ecosistemas sufren serios cambios, que afectan la población vegetal nativa y los animales del territorio.
(...)*

¹ <https://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/es/c/1391452/>

A pesar de todo, se toma en consideración el oficio de fecha 24 de febrero de 2023, suscrito por los representantes de la Comunidad del Resguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá, en el cual manifiestan que el 50 % del predio quedará para cultivos propios y el otro 50% de reserva, en especial los ojos de agua; además, teniendo en cuenta la superficie agropecuaria utilizable calculada mediante el levantamiento topográfico, la cual arroja el valor de 65.3833 %, se conceptúa desde el componente agroambiental que el inmueble en estudio, es apto para llevar a cabo labores enfocadas a la preservación de las plantas y animales silvestres de la región; a su vez, en las áreas aprovechables se pueden implementar sistemas de producción, donde se integren al mismo tiempo cultivos permanentes y árboles frutales, con el objeto de prevenir derrumbes y garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad étnica.

(...)

Por su parte, del Informe de Necesidad de la Tierras de la DAE se generaron las siguientes conclusiones:

Se identifica la necesidad de la comunidad indígena del Resguardo San Andrés de Pisimbala, frente a la ampliación de su territorio en cuanto la importancia de dotar de tierras a las familias carentes de la misma, garantizándoles el acceso y facilitándoles ejercer sus actividades propias como lo es la agricultura característica del pueblo Nasa. De igual forma dentro de la normatividad se establece la elegibilidad de predios cuyas características estén relacionadas a los usos y costumbres de índole espiritual, en este caso el predio Paraíso permitiría dotar de tierras a algunas familias que no cuentan con estas y la posibilidad de desarrollar actividades de conservación y de contacto espiritual, garantizando espacios de conservación cultural que se relacionan con zonas de cuidado ambiental que representan parte del predio Paraíso.

En consecuencia, desde la perspectiva articulada de los profesionales a partir de la visita técnica y lo manifestado por la comunidad del resguardo indígena San Andrés de Pisimbala se da concepto positivo para continuar con la compra del predio Paraíso y su proceso de ampliación del actual territorio del resguardo, siendo el predio Paraíso una opción para satisfacer en medida la necesidad de esta comunidad, expectante de ampliación de su territorio no solo en el sentido de suelos para la soberanía alimentaria, sino para el desarrollo integral de sus practicas culturales aunadas en su relacionamiento con el entornos y el paisaje.

En lo que respecta al componente agroambiental la viabilidad para la compra directa del predio denominado Paraíso es POSITIVA, ya que la Comunidad beneficiada destinará el 50% del terreno para reserva; además, van a hacer aislamientos y reforestar con especies nativas.

Las actividades productivas que se realicen deberán ajustarse a la función social y ecológica de la propiedad. De esta forma, se deben seguir cuidando los bosques y las fuentes hídricas, así como la cohesión social y la cosmovisión del grupo étnico. Esto implica, además, armonizar los instrumentos de planeación, de gobierno y de justicia propia de la comunidad con los de los entes territoriales, así como ceñirse a las limitantes que determine la autoridad competente para el caso.

(...)

Recomendaciones:

Evitar el sobrepastoreo y las malas prácticas agrícolas, con el fin de mitigar la pérdida de la cubierta vegetal, disminuir el empobrecimiento del suelo y de la vegetación.

Aplicar medidas de restauración y recuperación de los ecosistemas como crear bancos de semillas, aportarle nutrientes al suelo y plantar árboles.

Finalmente, se le sugiere a los integrantes de la comunidad étnica, tener presentes las observaciones que den lugar por parte de las autoridades competentes regionales frente a las zonas de protección y reserva que se encuentran dentro predio Paraíso, relacionadas con la función social y ecológica de la propiedad.

En este orden de ideas, y redondeando la argumentación antes expuesta, resulta necesario precisar que, si bien el predio en mención se encuentra inmerso en zonas protegidas, esto per se no es impedimento jurídico para dotar de tierras a la comunidad indígena, y es así como, de acuerdo con la necesidad de la tierra, los usos y costumbres de la comunidad, se cumple con la con Función Social y Ecológica de la Propiedad Rural de acuerdo con el Informe de Necesidad de la Tierra, lo cual comprende una visión integrada a la función del interés general, garantizando la pervivencia de las comunidades étnicas, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida colectiva y social.

Es así como el artículo 2.14.7.3.13 del Decreto 1071 de 2015, indica que la función social de la propiedad “(...) *está relacionada con la defensa de la identidad de los pueblos y comunidades que lo habitan, como garantía de la diversidad étnica y cultural de la Nación y con la obligación de utilizarlas en beneficio de los intereses y fines sociales, conforme a los usos y costumbres y cultura, para satisfacer las necesidades y conveniencias colectivas, el mejoramiento armónico e integral de la comunidad y el ejercicio del derecho de propiedad*”.

Por su parte, se destaca que desde la ANT se realizaron una serie de recomendaciones a la comunidad indígena de San Andrés de Pisimabalá - Nasa, en el marco del procedimiento de compras, relacionadas con el uso del suelo, concatenadas con el desarrollo de prácticas ecológicas y/o tradicionales de producción, de acuerdo con los planes de zonificación ambiental establecidos. De manera que, la comunidad debe realizar prácticas sostenibles que contribuyan a la protección y conservación de los recursos naturales con los que cuenta cada predio, **teniendo en cuenta a su vez que los insumos generados en el proceso de compra fundamentaron la pertinencia para la entrega del predio a esta comunidad, concluyendo que los usos y costumbres de la comunidad Nasa se compaginan con las características del predio, y su vocación de protección ambiental.**

Así las cosas, ya habiendo abordado a profundidad las consideraciones técnico jurídicas necesarias para dilucidar la problemática expuesta en las peticiones del asunto, en relación con el proceso de compra de tierras para la comunidad del Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá – Pueblo Nasa, pero como bien se expone en sus peticiones, desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT también se ha adelantado el procedimiento de compra de los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 204-33756, 204-34142, y 204-28283, los cuales se encuentran inmersos

en el Distrito de Manejo Integrado Serranía de Minas.

No obstante, como ocurrió con el proceso de compra del predio El Paraíso, identificado con el FMI 202-525, desde la Dirección de Asuntos Étnicos se emitieron las correspondientes comunicaciones a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, las cuales se anexan a la presente comunicación para su conocimiento y constancia. Así, en las referidas comunicaciones se le informó a la Corporación que sobre esos predios la Dirección de Asuntos Étnicos se encontraba adelantando los procedimientos de adquisición para comunidades indígenas, y se solicitaron los respectivos conceptos ambientales.

Así mismo, para atender todos los puntos de su petición, se adjunta una salida gráfica en la cual se relacionan los predios que han sido adquiridos por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos, para comunidades étnicas en el departamento del Huila, y se realizó el respectivo cruce de información geográfica con las áreas protegidas relevantes, con lo cual se da cuenta de que los predios que presentan traslape son los identificados con los FMI 202-525, 204-33756, 204-34142, y 204-28283.

Así mismo, se informa que una vez verificadas las bases de datos alfanuméricas y geográficas que reposan en esta Dirección, las cuales están en constante actualización y depuración, se realizaron los correspondientes cruces de información geográfica, generando las salidas gráficas adjuntas a la presente comunicación, dando cuenta de los procesos en trámite de compras, de formalización y formalizados para comunidades indígenas que se cruzan en el departamento del Huila, con las áreas protegidas enunciadas en las peticiones del asunto.

Es pertinente indicar que, los valores respecto de las áreas pretendidas de la capa geográfica de solicitudes de formalización territorial de comunidades étnicas son de referencia y pueden o no coincidir con el área oficial a formalizar; son datos dinámicos, sujetos a modificaciones o inexistentes, hasta que no surtan todas las actuaciones administrativas y se emita y registre el respectivo acto administrativo.

Por tanto, el área de las solicitudes podrá variar en forma, tamaño, ubicación conforme avanza el proceso y por tanto, el área de estos no puede ser tomado en cuenta como elemento o insumo para la toma de decisiones de fondo, y estos no deben ser compartidos o ilustrados con personas externas de la ANT o del personal estrictamente necesario de la corporación, sin previa autorización de la Dirección de Asuntos Étnicos. Luego cualquier tipo de divulgación que se realice de la información expuesta en la presente comunicación se entenderá como una grave vulneración de la Ley de Protección de Datos Personales, toda vez que la información que comprende a comunidades étnicas, quienes han sufrido una histórica discriminación en el país, podría ponerlos en grave peligro, y en este sentido, ninguna divulgación de información está autorizada, y debe manejarse bajo la más estricta reserva.



Finalmente, teniendo en cuenta lo señalado por la Corporación a su cargo, frente a las presuntas vulneraciones de las normas ambientales, en lo que respecta al predio El Paraíso, identificado con el FMI 202-525 del municipio de Gigante, se insta a organizar una mesa de trabajo conjunta con el Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá – Pueblo Nasa, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y la ANT, para analizar la situación expuesta en sus peticiones, y establecer un acuerdo con la comunidad indígena para poder concertar las acciones tendientes a la conservación ambiental y restauración del predio, pero reconociendo siempre la autonomía de la comunidad, sus necesidades, las afectaciones previas a su ocupación, y el debido respeto, para poder realizar un trabajo articulado y armónico que genere beneficios en servicios ambientales y ecosistémicos, no solo para la comunidad indígena, sino para la región.

Cordialmente,



ASTOLFO ARAMBURO VIVAS

Director de Asuntos Étnicos
Agencia Nacional de Tierras

Preparó: Pedro David Navarro Armenta. / Abogado Contratista DAE, Stiven David Bello. / Ingeniero Ambiental contratista DAE, Laura Herron/ Abogada Contratista DAE, Suad Almanza- Contratista DAE y Emilio Luna / Asesor jurídico DAE
Revisó y aprobó: Emilio Luna / Asesor jurídico DAE.

Anexo: Informe Agroambiental, Informe de Necesidad de la Tierra, requerimientos a la CAM y salidas gráficas.